

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE LEÓN

Francisco
CONCERTADO

ADVERTENCIA OFICIAL

Según que las Sres. Alejo y Sme-
tina realicen los números del Boletín
que corresponden al distrito, disponiendo
que se dé al día siguiente al día de sus-
cripción, desde entonces se hará el recu-
po del número siguiente.

Las Secretarías de la Real Audiencia
de Valladolid y de la Real Audiencia de
Valladolid, para su consideración, que debe
ser verificada cada año.

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

Se publica en la Gaceta de la Diputación provincial, a cuatro pe-
setas el número, y a los particulares, pagados al solicitar la suscripción. Los
números de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
nistrándose solo sobre las suscripciones de trimestre, y únicamente por la
cantidad de pesetas que resulte. Las suscripciones abonadas se cubren con
cheques de pago.

Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publicada
en los números de este Boletín de fecha 30 y 22 de diciembre de 1905.
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año.
Número anual, veintidós pesetas de postal.

ADVERTENCIA EDITORIAL

Las disposiciones de las autoridades, excepto las que
sean a instancia de parte no pobre, se insertarán ofi-
cialmente, asimismo cualquier anuncio concerniente al
servicio nacional que demande de las mismas; lo de in-
terés particular previo el pago adelantado de veinte
céntimos de peseta por cada línea de inserción.

Los anuncios a que hace referencia la circular de la
Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, se
cumplirán al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los Boletines Oficiales de 20 y 22 de diciem-
bre ya citado, se abonarán con arreglo a la tarifa que
en mencionados Boletines se inserta.

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. el Rey Don Alfonso XIII
(Q. D. G.), S. M. la Reina Doña
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el
Príncipe de Asturias e Infantes, con-
tinuez sin novedad en su importante
salud.

De igual beneficio disfrutan las
señoras personas de la Augusta Real
Familia.

(Gaceta del día 22 de julio de 1920)

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

CIRCULAR

El ya grave problema de la vivien-
da, motivado desde el siglo anterior
por el incesante crecimiento, no sólo
de las ciudades, si que también de
simples aldeas rurales, que merced
al establecimiento de una fábrica,
explotación de una mina o creación
de una industria cualquiera, se
convierten en centros de actividad
y trabajo, sin que correspondiera
a este fenómeno la manera
rápida de construir habitaciones ade-
cuadas a la economía y higiene,
no obstante tantas leyes y disposi-
ciones protectoras de la fabricación
de casas baratas para obreros y to-
das las clases modestas de la socie-
dad, se ha agudizado extraordina-
riamente con motivo de la guerra
mundial, al extremo de que la caren-
cia de habitaciones destinadas a ser
alquileres, coloca a la generalidad
de los ciudadanos en una situación
lamentable, haciéndolos víctimas de
la violencia moral ejercida por
ciertos propietarios de predios ur-
banos que, merced a la ley de la
oferta y la demanda, suben el precio
de los arrendamientos de manera
desproporcionada con las circunstan-
cias, viéndose el arrendatario obli-
gado a aceptar cuantas condiciones
onerosas se le imponen, si no
ha de encontrarse privado del ar-
tículo de la habitación, tan de pri-
mera necesidad para la vida como
la de la alimentación y consumo.
Tal actitud se explica porque el

propietario no se ha dado cuenta
de que la teoría reinante del
Intervencionismo del Poder público
en las relaciones sociales de los in-
dividuos para mantener la paz y
realizar la justicia, ha limitado pru-
dentemente aquel férreo dominio ro-
mano en aras de la «salus populi»
ante la que todo derecho cede. Así
ocurre entre nosotros, que no hay
proyecto o ley relacionados con la
propiedad que deje de seguir esa
orientación: todas las sociales en ge-
neral, y en especial la de 25 de julio
de 1908, que rectamente aplicada
extinguiría los incalculables daños
de la Usura, y la de 11 de noviem-
bre de 1916, referente a las Subsisten-
cias, con sus múltiples disposi-
ciones complementarias, realizan
una misión protectora en todos esos
contratos en beneficio de la parte
colocada en un plano de inferioridad,
y sin la que el prestatario
y consumidor quedarían entran-
cados a la codicia y hasta la inhu-
manidad de la parte prepotente.

El Gobierno de S. M. se encontró
con una nueva fase de los problemas
de la Usura y de las Subsistencias,
la de la vivienda, y al presenciar la
explotación de que se hacen eco mu-
chos inquilinos y cuyos consecuen-
cias hubieran afectado hasta al or-
den público, porque éstos, repelidos,
se veían obligados a ceder a toda
exigencia ante la presión de encon-
trarse sin casa ni hogar, y varios de
ellos privados de absoluto también
del ejercicio de su industria o com-
ercio, o sea de los medios de vida,
el Real decreto de 21 de junio últi-
mo, modelado en precedentes par-
lamentarios, hubo de extender la
esfera de acción que la segunda ley
citada le otorga, al contrato de
arrendamiento de predios urbanos y
al procedimiento que para el des-
hucio marca la ley de Enjuiciamien-
to civil, creando un Tribunal, espe-
cial de Consejo paritario, compues-
to de propietarios e inquilinos y pre-
sido por el Juez municipal, que con
arreglo a las nuevas normas resuel-
va las cuestiones que surjan entre
unos y otros.

Como éstas continúan encerradas
dentro de los límites que se reserva
el Derecho privado, no parecía que
nuestro Ministerio hubiera de ser
requerido para intervenir en ellas;

pero viene a demostrar lo contrario
la actuación de los Juzgados de esta
Corte en los distintos casos de apli-
cación del Real decreto, que ya se
presentaron, pues por virtud de lo
dispuesto en el art. 74 de la ley de
Enjuiciamiento civil, oyeron a los
Fiscales municipales respectivos en
orden a la competencia por razón
de la materia.

De ahí el que, y a fin de manten-
er un criterio uniforme en ese par-
ticular, deba trazar esta Fiscalía la
línea de conducta que hayan de se-
guir los funcionarios de todas cate-
gorías dependientes de la misma.

Contra toda previsión, de manera
más o menos explícita, viene a plan-
tearse con esos acuerdos un pro-
blema de suma trascendencia: el de
aplicación o inaplicación del Real
decreto; en una palabra, su consti-
tucionalidad.

Nuestro carácter de Cuerpo úni-
co, sometido al impulso de un solo
jefe, y funcionando siempre como
instrumento del Poder ejecutivo, aleja
toda idea de resistencia o obstácu-
lo al cumplimiento de las disposi-
ciones generales que dicho Poder se
crea obligado a dictar, antes debo-
mos ser sus defensores, ora en la
vía civil, ora en la contencioso-admi-
nistrativa, ora hasta la parte, como
ocurrió con los decretos de 6 y 7 de
marzo de 1919.

De modo que, por esa razón, el
Ministerio Fiscal nunca podría po-
ner en duda, ni someter siquiera a
debate, la aplicación de las medi-
das adoptadas por la Real disposi-
ción del 21 de junio, incluso la at-
ribución a la competencia especial que
establece, modificadora de las re-
glas generales comprendidas en la
expresada ley de Enjuiciamiento.

Además, por convicción, en este
caso concreto, siempre procedente
prestar a aquélla el asentimiento
debido: en primer lugar, porque la
facultad ministerial está basada en
las amplísimas atribuciones conve-
nidas por la ley de Subsistencias; y
aparte esto, en segundo, porque en
vista de las actuales circunstancias,
no pudo haber urgencia más carac-
terizada que la determinante del
planteamiento del expuesto reme-
dio, y en su virtud, imposible dudar
que siempre se estaría en el caso
del último apartado del número ter-

cer, artículo 26 de la ley de 5 de
abril de 1904, y en cumplimiento del
mismo, el Gobierno dará cuenta a
las Cortes, según prescribe el ar-
tículo 12, único Poder que puede
censurar su conducta.

Otro aspecto más importante para
el Ministerio público puede tener
la aplicación de este Real decreto:
con objeto de inculcarlo, y de con-
siguiente, que el laudable propósito
en que sus disposiciones se hallan
inspiradas, fracase por completo,
acaso se utilice al efecto algún me-
dio ilícito con tendencia, ora a di-
minuir la cantidad global del alque-
ler que define el párrafo 2.º del ar-
tículo 1.º, ora a ejercitar la acción
de deshucio en casos distintos del
prescrito en el artículo 2.º, ora
a que no se conceda al arrendatario
la prórroga del tercero. Es de espe-
rar de la santidad de los hechos que
cumplirán lealmente cuanto preven-
nidos dichos preceptos, pero si ha-
biera alguna excepción y resultara
ésta hecha en fraude del arrendate-
rio, sostendrán los Fiscales por el
procedimiento marcado, la apli-
cación del art. 554 del Código penal.

Sírvase V. S. dar cuenta a este
Centro de cuantos asuntos civiles o
criminales relacionados con el Real
decreto repetidamente mencionado,
tenga intervención el Ministerio fis-
cal, y disponga la publicación de este
circular en los Boletines Oficiales
de la respectiva provincia, para que
llegue a conocimiento de sus subor-
dinados y puedan cumplir las instruc-
ciones que contiene sin excusas ni
pretexto alguno.

Madrid, 17 de julio de 1920. — Vic-
tor Corchón.

Señor Fiscal de la Audiencia de...
(Gaceta del día 18 de julio de 1920)

FISCALÍA

DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE
VALLADOLID

Circular

El Excmo. Sr. Fiscal del Tribunal
Supremo, en telegrama fecha 17 del
actual, me dice lo siguiente:

«Además de cumplir lo prevenido
en circular de esta fecha, que publi-
cará Gaceta de mañana, sírvase V. S.
reclamar a los Fiscales municipales

del Territorio de esa Audiencia, una relación de los juicios que se tramiten con sujeción al Real decreto de 21 de junio último, y la resolución que en los mismos se dicta por los jueces, tanto en primera instancia como, caso de apelación, en segunda. Asimismo publicará este telegrama en el *Boletín Oficial* respectivo.

En cumplimiento de ese acuerdo, los Fiscales municipales de este Territorio, remitirán a esta Fiscalía los días 1.º y 15 de cada mes, la relación a que se contrae el anterior telegrama; encargándoseles la mayor exactitud en el cumplimiento de este servicio.

Valledupar 20 de julio de 1920.—
El Fiscal de la Audiencia Territorial, Salustiano Portal.

Gobierno civil de la provincia

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 55 de la ley Provincial, y haciendo uso de las facultades que me están conferidas por el 62 de la misma, he acordado convocar a la Excm. Diputación provincial para el día 2 del próximo mes de agosto, a las doce horas, en la sala de sesiones de su Palacio, al objeto de inaugurar las sesiones del primer período semestral.

León 23 de julio de 1920.

El Gobernador,
Eduardo Rosón

PESAS Y MEDIDAS

Circular

En virtud de lo que determina el artículo 60 del Reglamento de Pesas y Medidas, he dispuesto que la comprobación periódica correspondiente al presente año, tenga lugar en el Ayuntamiento de Riaño, el día 30 del actual.

Las fechas de la comprobación en los demás Ayuntamientos que comprenda dicho período judicial, se anunciarán oportunamente a los señores Alcaldes, para que éstos lo hagan saber a los comerciantes e industriales.

León 22 de julio de 1920.

El Gobernador,
Eduardo Rosón

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

SUBSECRETARÍA

Sección de Política

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Juan Francisco Fernández y tres más, ex-Concejales del Ayuntamiento de Los Barrios de Salas, contra el fallo de esa Comisión provincial que declaró válida la proclamación de Concejales por el artículo 23, verificada por la Junta municipal del Censo electoral de dicho pueblo.

Resultando que D. Juan Francisco Fernández, y tres más, ex-Concejales, recurran ante esa Comisión provincial pidiendo se declarase nula la proclamación de Concejales verificada en el pueblo de Los Barrios de Salas, hecha por la Junta municipal del Censo electoral, fundándose en que los recurrentes no tuvieron conocimiento de tal acto, pues ni la

Junta municipal ni el Secretario de la misma, hicieron los correspondientes anuncios de la elección; que el Alcalde no remitió a los pueblos que forman el Municipio, el *Boletín Oficial* en el que apareciese insertada la convocatoria, por cuyo motivo no pudieron proclamarse.

Resultando que en el expediente se justifica, por certificaciones, que el Alcalde dictó providencia mandando fijar el *Boletín Oficial* de convocatoria en la tabla de anuncios y fijar edictos en los pueblos, y diligencia de haber sido cumplimentada dicha providencia el día 25 de enero último.

Resultando que esa Comisión provincial, en vista de que no se justifican por los recurrentes los hechos en que se fundamenta el recurso, acordó declarar válida dicha proclamación.

Resultando que contra dicho fallo recurren a este Ministerio, exponiendo los mismos argumentos que alegaron ante esa Comisión provincial, y piden su revocación.

Considerando que el escrito de reclamación, formulado contra la validez de la proclamación de Concejales de que se trata, se encuentra desprovisto por completo de toda prueba documental que sirviera para demostrar la veracidad de los hechos que en el mismo se alegan, no siendo, por tanto, posible fundar en las simples manifestaciones de los reclamantes la declaración de nulidad que se pretende, conforme a criterio constantemente seguido por este Ministerio en diferentes Reales órdenes, entre ellas las de 18 de septiembre de 1888 y 28 de junio de 1890, dictadas de acuerdo con el Consejo de Estado.

Considerando que extrínseca al acto original de la Junta municipal del Censo, del día 1.º de febrero último, resulta de la misma que no se presentaron más propuestas de candidatos que aquellas que fueron objeto de proclamación, por lo que es forzoso reconocer la validez de lo actuado con tal motivo por la referida Junta, debiendo asimismo estimarse como procedente el acuerdo impugnado de esa Comisión provincial, por encontrarse ajustado a la legalidad y responder a las resultantes del expediente.

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido a bien desestimar el recurso interpuesto, confirmando el fallo apelado de esa Comisión provincial, y en su consecuencia, declarar la validez de la proclamación de Concejales verificada el día 1.º de febrero último, con aplicación del art. 29 de la ley Electoral, por la Junta municipal del Censo en el Ayuntamiento de Barrios de Salas.

De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos, con devolución del expediente.

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 8 de julio de 1920.—Bergamín.

Sr. Gobernador civil de León.

Visto el recurso de alzada promovido ante este Ministerio con fecha 25 de marzo de 1920, por don Alejandro de la Red, contra el acuerdo de esa Comisión provincial que declaró la validez de la proclamación de Concejales hecha por la Junta municipal del Censo electoral de Cebanico el día 1.º de febrero

de 1920, con arreglo a lo dispuesto en el art. 29 de la ley Electoral.

Resultando que D. Alejandro de la Red acordó, en escrito fecha 12 de febrero, a la Comisión provincial pidiendo la nulidad de la proclamación de Concejales hecha por la Junta municipal del Censo electoral de Cebanico el día 1.º de febrero de 1920, con arreglo al art. 29 de la ley Electoral, fundándose en que pidieron su proclamación debida, legalmente, más candidatos que número de vacantes existía, por lo cual fué manifestada la voluntad del cuerpo electoral de ir a la fecha en los comicios; propuesta escrita que fué rechazada por la Junta sin motivo justificado.

Resultando que dada audiencia a los Concejales proclamados, según badarse conformes con lo que resulta del acta de la Junta municipal del Censo electoral.

Resultando que esa Comisión provincial, en sesión de 9 de marzo de 1920, acordó declarar válida la proclamación de Concejales hecha en Cebanico con arreglo al artículo 29 de la ley Electoral, por considerar que la Junta municipal al aplicar el art. 29 de la Ley, se fundó en que la propuesta hecha por D. Eugenio de la Red y D. Lino González es legal, por no estar comprendidos dentro del párrafo 2.º del art. 24 de la Ley.

Resultando que del anterior acuerdo se ha alzado ante este Ministerio D. Alejandro de la Red García, en escrito fecha 25 de marzo de 1920, en el cual aduce todo cuanto dejó sentado en su escrito a esa Comisión provincial, y pidiendo, en méritos de justicia, que se revoque dicho acuerdo.

Considerando que si bien es cierto que en el acta de la proclamación se presentaron siete propuestas, y la Junta declaró definitivamente proclamados a cinco, desestimando la de D. Alejandro de la Red y la de D. Domingo González, por no llenar las necesidades exigidas por el art. 24 de la ley Electoral, no constituye este hecho motivo de nulidad de la proclamación verificada, pues no consta del acta que los interesados se hallasen dentro de las condiciones del párrafo 2.º del artículo antes citado.

Considerando que precisa armonizar, cuando de la proclamación de Concejales por el art. 29 se trata, los artículos 24 y 26 de la ley, y si bien el primero exige que las propuestas estén suscritas o firmadas por dos Concejales o ex-Concejales, no debe olvidarse que el segundo ordena que al acto de proclamación esté presente el candidato por sí o por medio de apoderado legal, y constando del acta de proclamación que no estuvieron presentes los candidatos cuyas propuestas fueron desestimadas, es evidente que la Junta municipal obró dentro de sus facultades no admitiendo sus propuestas.

Considerando que atendido lo expuesto, necesariamente tuvo la Junta que hacer la proclamación de Concejales con arreglo al art. 29 de la ley Electoral, puesto que era preciso las vacantes que correspondía cubrir en el término municipal, a igual número los candidatos que habían presentado sus propuestas en

condiciones de ser proclamados; S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido a bien confirmar el acuerdo recurrido de esa Comisión provincial, que declaró la validez de la proclamación de Concejales verificada en el Ayuntamiento de Cebanico el día 1.º de febrero último, con arreglo al artículo 29 de la ley Electoral.

De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos, con devolución del expediente.

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 8 de julio de 1920.—Bergamín.

Señor Gobernador civil de Leda.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel García, contra acuerdo de esa Comisión provincial que declaró la validez de la proclamación de Concejales del Ayuntamiento de Vega de Espinareda.

Resultando que el mismo recurrente, en escrito a esa Comisión provincial, reclamó contra la proclamación de Concejales hecha por la Junta municipal del Censo de Vega de Espinareda, por no haber admitido la misma las propuestas presentadas, pretextando que había transcurrido la hora reglamentaria, infringiéndose el art. 24 de la vigente ley electoral; acompañando, como prueba a lo expuesto, información testifical.

Resultando que esa Comisión provincial, en sesión de 6 de marzo, acordó la validez de la proclamación de candidatos verificada en Vega de Espinareda el 1.º de febrero último, por estimar que el daseo del cuerpo electoral de intervenir en la contienda electoral, tiene medios de manifestarse ante la Junta, dentro de las cuatro primeras horas de sesión que estuvo reunida la Junta.

Resultando que contra el anterior acuerdo de esa Comisión provincial, recurre ante este Ministerio D. Manuel García y Girál, pidiendo la revocación del mismo, por entender que no está dictado con arreglo a la Ley, toda vez que la declaración testifical que obra en el expediente, se comprueba que la Junta estuvo reunida solamente hasta las doce y media, en cuya hora ya se había presentado ante la Junta pidiendo su proclamación.

Considerando que del examen del acta de proclamación de candidatos, verificada por la Junta municipal del Censo de Vega de Espinareda, se acredita el que la misma se atuvo en el desempeño de su peculiar cometido a lo taxativamente prevenido en la ley Electoral, desde el momento en que proclamó a los que en forma legal lo solicitaron: hechos que se justifican no tan sólo con el acta de proclamación que corre unida al expediente, sino que también con las propuestas y solicitudes que la complementan.

Considerando que está justificado el que D. Eugenio Martínez y otros, no solicitaron el ser proclamados con arreglo al art. 24 de la ley Electoral, unido a que efectuaron la comparecencia ante la Junta a las trece horas del día 1.º de febrero, y por consiguiente, mucho después de haber terminado la sesión, por lo no es posible estimar los cargos aducidos por los protestantes.

Considerando que el expediente tramitado es un documento oficial y fehaciente, el que no puede ser des-

virtuoso por el acto de carácter privado, presentados por los reclamantes;

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido a bien desestimar el recurso, y confirmando el fallo apelado de esta Comisión provincial, declarar la validez de la proclamación de Concejales efectuada por la Junta municipal del Censo de Vega de Espinosa, el día 1.º de febrero último, con arreglo al art. 29 de la ley Electoral.

De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos, con devolución del expediente.

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 8 de julio de 1920.—*Bergamín*.

Sr. Gobernador civil de León.

AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALLADOLID

Presidencia

Debido hacerse efectiva en 1.º de enero de 1921, la renovación ordinaria de los Fiscales municipales y sus suplentes, en la primera mitad, por orden alfabético, de los Municipios pertenecientes a la provincia de León, se hace público a fin de que, los que aspiren dichos cargos, presenten en la Secretaría de gobierno de esta Audiencia, en pliego dirigido al Ilmo. Sr. Presidente de la misma y antes del 15 de agosto inmediato, sus instancias con los documentos comprobantes de sus méritos y condiciones; cuidando de que tanto en aquellos como en éstos, habrá de emplearse el papel sellado correspondiente; sin cuyo requisito se tendrán por no presentadas en forma legal y no se las dará, por tanto, el curso debido. Valladolid 15 de julio de 1920.—P. A. de S. S. El Secretario de gobierno, Jesús de Lezcano.

AYUNTAMIENTOS

Don Pedro Prieto Fuente, Presidente de la Junta general de repartos de este Municipio.

Hago saber: Que confeccionado el repartimiento general de utilidades, conforme al Real decreto de 11 de septiembre de 1918 para el actual ejercicio económico, se halla expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por quince días a fin de que los contribuyentes en él comprendidos le examinen, y durante dicho plazo y tres días después, formulen las reclamaciones en contra que estimen justas.

Santibonillas 12 de julio 1920.—Pedro Prieto.

Alcaldía constitucional de Barjas

Por renuncia del que lo desempeñaba, se halla vacante el cargo de Secretario de este Ayuntamiento, con el sueldo anual de 1.250 pesetas, que tiene señaladas en presupuesto, pagadas por trimestres vencidos de los fondos municipales, con las obligaciones que a tal cargo imponen las disposiciones contenidas en el capítulo V de la ley Orgánica municipal. Los aspirantes al mismo presentarán en esta Alcaldía, dentro del término de quince días, después que este anuncio aparezca inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sus solicitudes documentadas, con

los que acrediten su edad, buena conducta y las demás circunstancias de capacidad del solicitante para el desempeño del referido cargo; transcurrido el plazo señalado, no se admitirán las que se presenten, procediendo la Corporación al nombramiento del que crea más conveniente y de su confianza de entre los solicitantes, y reservándose el derecho de proceder a nuevo concurso, si a conocimiento de la misma no le ofreciese dicha confianza ninguno de aquéllos.

Barjas junio 31 de 1920.—El Alcalde, José Fernández.

Alcaldía constitucional de Valderas

Por acuerdo de la Corporación municipal que tengo el honor de presidir, se anuncia la provisión de cargo de Agente ejecutivo de este Municipio, que, como comisionado de apremio, proceda a la realización de los créditos que existen a favor de este Ayuntamiento, a fin de que los que aspiren a desempeñarlo, lo soliciten de esta Alcaldía en el término de ocho días, a contar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Valderas julio 14 de 1920.—El Alcalde, Eduardo López Oviero.

Alcaldía constitucional de Cistierna

Por término de quince días queda expuesto al público en esta Secretaría, el presupuesto extraordinario formado por este Ayuntamiento para el año de 1920 a 21, a fin de oír reclamaciones.

Cistierna 16 de julio de 1920.—El Alcalde, Crisencio G. Puente.

Alcaldía constitucional de Santa María de Ordás

Por espacio de quince días se hallan expuestas al público en esta Secretaría, las cuentas municipales de este Ayuntamiento, correspondientes al año económico de 1919 a 1920, con el objeto de oír las reclamaciones que pueden producirse; pasado dicho plazo no se admitirá reclamación alguna.

Santa María de Ordás 12 de julio de 1920.—El Alcalde, Blas Fernández.

Alcaldía constitucional de Fresno de la Vega

Formado el repartimiento general de consumos a que se refiere el Real decreto de 11 de septiembre de 1918, queda expuesto al público por el término reglamentario en la Secretaría de este Ayuntamiento para oír reclamaciones; advirtiéndose que éstas han de ser basadas determinadamente, según dispone el art. 86 del citado Real decreto; de no ser así, no serán admitidas.

Fresno de la Vega 19 de julio de 1920.—El Alcalde, Domingo Gigosos.

Alcaldía constitucional de Cimanes de la Vega

Me participa D. Manuel Paramio, vecino de Santa Colomba de Carabias, que el día 9 del actual desapareció de la finca titulada «El Regalar», una yegua suya, de pelo negro, irlandesa, con mano y pata izquierdas calzadas en blanco y marca

del Estado en la nalga izquierda; y se ruega que avisen a esta Alcaldía o al interesado los que sepan de su paradero.

Cimanes de la Vega 12 de julio de 1920.—El Alcalde, Fructuoso González.

Alcaldía constitucional de Carucedo

Con esta fecha se ha presentado ante mi autoridad el vecino de Medullas, Miguel Vega Gómez, manifestándome que en el día 5 de los corrientes apareció junto a su casa, un pollino, cuyas señas se hacen constar al final.

El dueño de éste puede pasar a recogerlo a dicho pueblo y domicilio, previa la justificación de propiedad, y al mismo tiempo, abonar los gastos que dicho semoviente haya causado.

Señas

Azuda 1,045 metros, o sea cinco cuartas, edad seis años, pelo blanco, oreja afilada, ojos cejiblanco y herido de las dos extremidades delanteras.

Carucedo 8 de julio de 1920.—El Alcalde, José Moral.

Para que la Junta pericial de cada uno de los Ayuntamientos que a continuación se expresan, pueda proceder a la confección del apéndice al milleramiento que ha de servir de base al repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, así como al de urbana, ambas del año de 1921 a 1922, se hace preciso que los contribuyentes por dichos conceptos que posean o administren fincas en el distrito municipal respectivo, presenten en la Secretaría del mismo relaciones de alta y baja, en el término de quince días, teniendo que justificar haber pagado los derechos reales a la Hacienda; de lo contrario, no serán admitidas.

Malanza

Ribanal del Camino
Saholices de Río
San Andrés del Rabanedo
San Esteban de Nogales
San Pedro de Bercianos
Vega de Infanzones

Alcaldía constitucional de Escobedo de Campos

Terminadas las cuentas municipales de este Ayuntamiento, correspondientes al año de 1919 a 1920, se hallan expuestas al público en esta Secretaría por espacio de quince días, a fin de que puedan ser examinadas y hacer las reclamaciones que estimen pertinentes.

Escobedo de Campos 14 de julio de 1920.—El Alcalde, Fortunato Cid.

Alcaldía constitucional de La Antigua

Terminado el reparto de consumos y pastos de este Ayuntamiento, formado por la Junta respectiva con arreglo al Real decreto de 11 de septiembre de 1918, para el año de 1920 a 21, se halla expuesto al público en esta Secretaría por término de quince días; transcurridos éstos y tres más, serán resueltas por la Junta las reclamaciones que se presenten.

La Antigua 18 de julio de 1920.—El Alcalde, Cipriano Prado.

Don José Rodríguez Fernández, Presidente de la Junta general del repartimiento de Villadecanes.

Hago saber: Que a los efectos del art. 93 del Real decreto de 11 de septiembre de 1918, se halla expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince días, el repartimiento general de utilidades para el año de 1920 a 21; debiendo advertir que durante dicho plazo y tres días después, se admitirán por la Junta las reclamaciones que se produzcan por las personas comprendidas en el expresado repartimiento, cuyas reclamaciones habrán de fundarse en hechos concretos, precisos y determinados, y contener las pruebas necesarias para la justificación de lo reclamado.

Villadecanes 18 de julio de 1920. El Presidente, José Rodríguez.

Alcaldía constitucional de Chozas de Abajo

Según me comunica el Guardia del campo de Chozas de Abajo, el día 9 del actual se apareció en este término una mula burra, que se supone extraviada, de las señas siguientes: pelo castaño claro, herradura de las cuatro extremidades, alzada 1,350 metros, próximamente, cabeza de vaca bastante usada.

Lo que se hace público para que pueda llegar a conocimiento de su dueño, a quien se entregará, previo pago de los gastos originados por su manutención y custodia.

Chozas de Abajo 11 de julio de 1920.—El Alcalde, en funciones, Jesús Fernández.

Alcaldía constitucional de Cacabelos

Según manifiesta Pablo de la Fuente, vecino de esta villa, el día 6 del corriente desapareció un caballo de su propiedad, de las señas siguientes: edad 15 meses, pelo negro pelicano, alzada, próximamente, 1,250 metros, o sea seis cuartas escasas, unos pelos blancos en la frente y patillas de las dos manos.

Se ruega a las autoridades procedan a su busca y ocupación, y caso de ser hallado, lo pongan a disposición de esta Alcaldía, para entregarlo a su dueño.

Cacabelos 14 de julio de 1920.—El Alcalde, P. O., Hermógenes D. Quijano, Secretario.

Clula de citación

Torrón Pegandez (Francisco), de 37 años de edad, casado, minero, natural de Alcañices, hijo de José y de Calmita, y domiciliado últimamente en Villavieja, Ayuntamiento de Villablino, hoy en ignorado paradero, comparecerá dentro del término de diez días ante el Juzgado de Instrucción de Palencia y Secretaría del Sr. F. Salomón, para notificarle el auto de terminación dictado en sumario contra él seguido por contrabando de tabacos, con el número 34 de 1920, citarle y emplazarle a los fines y efectos del artículo 625 de la ley de Enjuiciamiento criminal y requerirle designe Abogado y Procurador que le defienda y represente ante esta Audiencia provincial; bajo los apercibimientos legales si no comparece.

Palencia 1.º de julio de 1920.—El Secretario judicial, Marcelino Fernández Salomón.

González Díez (Laureano), de veintidós años, soltero, minero, vecino de Fontanes, partido de León, que trabajó en las minas de Butevra, en este Concejo, comparecerá en término de diez días ante este Juzgado de Instrucción de Cargas de Ocas, para ser reconocido por los facultativos, por estar así acordado en el sumario que se sigue con el número 37 del corriente año, por lesiones.

Cargos de Ocas 8 de julio de 1920.—Leandro Álvarez.

Juzgado 5.º de lo civil de México CONVOCATORIA

En la sección primera de las autos del interdicto del Sr. Urbano Díez, el ciudadano Licenciado José María Rincón, Juez 5.º de lo civil de esta capital, en auto fecha 8 de marzo próximo pasado, mandó en convección a las personas que acrisen con derecho a los bienes que quedaron a su fallecimiento, para que se presenten a deducir el que tengan, dentro del término legal.

En cumplimiento de lo mandado, y para su publicación en el periódico oficial de la provincia de León, a donde corresponde el pueblo de Villayuste, lugar del nacimiento del autor de la herencia, explico la presente.

México abril 24 de 1920.—El primer Secretario, F. Moreno Baca.

Anuncio

El Jefe de Propiedades militares de León,

Hace saber: Que debiendo arrendarse en esta plaza locales con destino al Batallón Reserva de Zapadores, por terminarse en plazo próximo el contrato de los que actualmente ocupa, se convoca por el presente anuncio a los propietarios de fincas de esta capital que deseen cederlos con dicho objeto, debiendo los que lo verifican, hacerlo por sí o por sus legítimos representantes, en papel del sello de una peseta, sin raspaduras ni enmendaduras, dando la publicación de este anuncio hasta la noche del día 1.º de agosto, en la oficina de esta Jefatura, sita en la calle de Sierra del Agua, núm. 3, y arreglado al modelo que a continuación se inserta.

Los locales que se arriendan han de tener la capacidad suficiente, repartida en unas 15 ó 18 habitaciones, para instalar en ellas las oficinas de dicho Batallón de Reserva, alojamiento de los ordenanzas, cocina, retretes y servicios secundarios: todo ello con arreglo al plano de necesidades que se halla de manifiesto en la referida Jefatura.

El arriendo será por un plazo fijo de duración, prorrogable o no por la táctica o con aviso anticipado, por tiempo que se determine, bien para cesar, bien para continuar; en la inteligencia de que el tiempo máximo de duración del arriendo, incluso las prórrogas, no podrá exceder de diez años.

El contrato empezará a regir desde el día que se entregue al local por inventario y sin derecho a reclamación alguna por el tiempo invertido en la tramitación del expediente.

El uso a que se destinaron los locales que se tratan de arrendar, será el de instalar en ellos el Batallón de Reserva de Zapadores, como queda dicho anteriormente.

Los locales se recibirán por el ramo de Guerra, bajo inventario, devolviéndose en la misma forma. Este inventario se formará por el Cuerpo de Ingenieros militares.

El contrato de arriendo se formalizará con arreglo a la ley de Inquilinatos y con sujeción a las prescripciones de la vigente ley del Timbre, y serán de cuenta del propietario los gastos de contribuciones, impuestos y demás cargas de la finca, los de anuncio y ejemplares del contrato que sean necesarios al ramo de Guerra, las obras de entretenimiento y reparo de desperfectos ocasionados por el uso natural.

Por el ramo de Guerra podrá ser reconocido el contrato si no supliere la dependencia que ocupa el edificio, se trasladar a otro propiedad del Estado, o dejara de consignarse en presupuesto el crédito respectivo para el pago de la renta estipulada.

El importe del arriendo no abonará mensualmente y a medida que lo permitan las consignaciones de Tesoro, por libramientos expedidos a favor del propietario o de su representante legal, sobre las Cajas de Hacienda. El arrendador quedará sometido a los impuestos que por pagos del Tesoro fija las Leyes de Hacienda.

La Administración se reserva el derecho de rescindir el contrato en todo tiempo, siempre que el arrendador no cumpla las condiciones del contrato.

Los locales que se ofrezcan serán visitados por la Junta de arriendos y reconocidos por el Cuerpo de Ingenieros militares, y aceptada que sea provisionalmente por ella la proposición más ventajosa, se elevará a la Superioridad para la resolución que proceda.

Recibida la aprobación definitiva, el Jefe de Propiedades militares le notificará al propietario de la finca, señalándole el día en que, entre ambos y el Comisario de Guerra Interventor del Servicio, deberá entenderse el contrato de arriendo.

El precio máximo del alquiler que el ramo de Guerra haya de abonar, será el de mil doscientas pesetas anuales.

En el concurso reglarán los preceptos del Reglamento para contratación administrativa en el ramo de Guerra de 6 de agosto de 1908; Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.º de julio de 1911; Reglamento de Obras del Cuerpo de Ingenieros de 4 de octubre de 1908, y disposiciones complementarias.

León 21 de julio de 1920.—El Jefe de Propiedades, Enrique Robles.

Modelo de proposición

Don F. de T. y T., domiciliado en y con residencia en provincia de calle núm. enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la provincia, fecha núm. re que se convoca a admisión de proposiciones para arriendo de los locales con destino a alojamiento del Batallón de Reserva de Zapadores, en León, ofrezco, con sujeción a aquél, la casa o tal planta, piso o pisos de la casa que posee en la calle núm. por plazo de años, prorrogables comprometiéndome al pago de las obras de entretenimiento y a las reparaciones por su uso na-

tural; a entregar y recibir la finca bajo inventario formado por el Cuerpo de Ingenieros militares; a percibir el importe del alquiler mensualmente, según lo permitan las atenciones del Tesoro; a la rescisión del contrato sin ulterior recurso, siempre que el Estado no necesite el local ofrecido, o por falta del que suscriba en el cumplimiento del contrato; a los gastos de formalización del contrato por mi cuenta, así como los demás que se consignan en el anuncio, por el alquiler anual de pesetas.

(Fecha, y firma del proponente).

OBSERVACIONES.—Si la proposición no se extiende en papel sellado, deberá ser en otro de igual tamaño, y adherirse la póliza correspondiente, antes de su presentación.

Si se firma por poder, se expresará como antefirma el nombre y apellido del poderdante o el título de la casa o razón social, y se justificará el concepto en que se comparece.

Subasta de inmuebles

Don Gil Pastana Pérez, Recaudador auxiliar de la Hacienda en la 1.ª zona de Sahagún. Ayuntamiento de Barcanos del Camleli. Hago saber: Que en el expediente que instruyo en esta localidad por débitos de la contribución, se ha dictado por esta oficina en fecha 14 de julio actual, la siguiente

«Providencia.—No habiendo satisficido los deudores que a continuación se expresan, sus descubiertos con la Hacienda, al podido reanudar los mismos por el embargo y venta de bienes muebles y semovientes, se acuerda la enajenación en pública subasta de los inmuebles pertenecientes a estos deudores, cuyo acto se verificará bajo mi presidencia el día 29 de julio actual, hora de las diez a las doce, en la casa consistorial de este Ayuntamiento, siendo posturas admitibles las que cubran las tres cuartas partes de la tasación.»

Notifíquese esta providencia a los deudores, y a los acreedores hipotecarios, en un caso, y anúnciese al público por medio de edictos en las Casas Consistoriales, y por los demás medios que expresa el art. 84 de la Instrucción,

Finca que se subastan: de

D. Matías Alonso Andrés.—Una tierra, en Barcanos del Camino, a la Laguna grande, de 28 áreas: linda O., Juana de Prado; M., la Laguna; P., Faustino Corral, y N., camino; tasada en 60 pesetas.

D.ª Petra de Prado García.—Una tierra, en Barcanos, a las Arenas, de 34 áreas: linda O., Francisco Huerta; M., camino real, y P., Prudencio Marne; tasada en 80 pesetas.

D. Eusebio Rodríguez.—Una tierra, en Barcanos, al pago de Coro, de 34 áreas: linda O., reguera del pago; M., Esteban Calzadilla, y N., Mariano Barrenade; tasada en 100 pesetas.

D. Domingo Rueda (herederos).—Una tierra, en Barcanos, al pago de la Horcada, de 64 áreas y 39 centiáreas: linda O., prados de particular; M., Francisco Toró; P., Donato Herreros, y N., Marqués de Villante; tasada en 120 pesetas.

D. Vicente Carbajal.—Una tierra, en Barcanos, al pago de la labra de

Coro, de 28 áreas y 30 centiáreas: linda O., raya de Calzada del Coto; M., Félix Nicolás; P., la ría, y N., camino de Carre Mercada; tasada en 40 pesetas.

D. Santiago Herreros (herederos).—Una tierra, en Barcanos, a la Horcada, de 20 áreas: linda O., prados de particulares; M., herederos de Isidoro Pastana; P., herederos de Antonia Morán, y N., herederos de Juan de Prado Reyero; tasada en 80 pesetas.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio, advirtiéndose, para conocimiento de los que deseen tomar parte en la subasta anunciada, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 85 de la Instrucción de 28 de abril de 1900:

1.ª Que los bienes trabados y a cuya enajenación se ha de proceder, son los expresados en la precedente relación.

2.ª Que los deudores o sus caucuhabientes, y los acreedores hipotecarios, en su caso, pueden librar las fincas hasta el momento de celebrarse la subasta, pagando el principal, recargos, costas y demás gastos del procedimiento.

3.ª Que los títulos de propiedad presentados de los inmuebles, están de manifiesto en esta oficina hasta el día de la celebración de aquel acto, y que los licitadores deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho a exigir ninguno otros.

4.ª Que será requisito indispensable para tomar parte la subasta, que los licitadores depositen previamente en la mesa de la presidencia, el 5 por 100 del valor líquido de los bienes que intenten rematar.

5.ª Que es obligación del rematante entregar en el acto la diferencia entre el importe del depósito constituido y el precio de la adjudicación; y

6.ª Que si hecha ésta no pudiere ultimar la venta por negarse el adjudicatario a la entrega del precio del remate, se decretará la pérdida del depósito, que ingresará en las arcas del Tesoro público.

Barcanos del Camino 14 de julio de 1920.—Gil Pastana.—V.ª B.ª: El Arrendatario, M. Maza.

BANCO DE ESPAÑA

Sucursal de León

Habiéndose extraviado el resguardo de depósito núm. 5912, de pesetas nominales 6 100, en títulos de la deuda perpetua al 4 por 100 interior, expedido por esta Sucursal en 16 de mayo de 1905 a favor de don Isidro Arlos Luna, se anuncia al público por tercera vez, para el que se crea con derecho a reclamar lo verifique dentro del plazo de dos meses, a contar desde la primera inserción de este anuncio en los periódicos oficiales: Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de esta provincia, según determina el artículo 6.º del Reglamento vigente de este Remo; advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin reclamación de tercero, se expedirá el correspondiente duplicado de dicho resguardo, anulando el primitivo y quedando al Banco exento de toda responsabilidad.

León 26 de junio de 1920.—El Secretario, José de Oria.

Imprenta de la Diputación provincial